



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020)

**Asunto:** Conciliación Prejudicial  
**Radicación:** 15001 3333 004 **2020 00103 00**  
**Convocante:** Hugo Alberto Amézquita Cárdenas  
**Convocado:** Nación- Ministerio de Educación Nacional –Fondo  
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

**I. ASUNTO**

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes el día 3 de agosto de 2020, ante la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja.

**II. ANTECEDENTES**

El señor Hugo Alberto Amézquita Cárdenas, a través de apoderada judicial, presentó solicitud de conciliación prejudicial con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantía parcial.

**III. TRÁMITE PROCESAL**

La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 18 de junio de 2020, y correspondió a la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja, en donde se efectuó la respectiva audiencia de conciliación el 3 de agosto del corriente año.

**IV. ACUERDO CONCILIATORIO**

La fórmula propuesta por la entidad convocada se contrae a los siguientes términos:

*“...la posición del Ministerio es CONCILIAR en la audiencia programada por ese Despacho, con ocasión a la convocatoria a conciliar promovida por HUGO ALBERTO AMÉZQUITA CÁRDENAS con CC 6766969 en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FOMAG, cuya pretensión es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías reconocidas mediante Resolución No 403 del 25/01/2017. Los parámetros de la propuesta, teniendo en cuenta la fecha de solicitud de las cesantías y la fecha en la cual Fidupervisora S.A. puso los recursos a disposición del docente, son los siguientes:*

*Fecha de solicitud de las cesantías: 15/11/2016*

*Fecha de pago: 24/04/2017*

No. de días de mora: 59

Asignación básica aplicable: \$ 3.397.579

Valor de la mora: \$ 6.681.905

Propuesta de acuerdo conciliatorio: \$ 6.013.715 (90%)

*Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL) No se reconoce valor alguno por indexación.*

*La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago. Se paga la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y el Decreto 2020 de 2019.”*

La parte convocante aceptó la propuesta presentada por la apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por último, el representante del Ministerio Público señaló que, a su juicio, el acuerdo conciliatorio contenía obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo modo y lugar de su cumplimiento, pues cumplía con los requisitos establecidos por la ley para su procedencia y, adicionalmente, no resultaba lesivo para el patrimonio público.

## V. CONSIDERACIONES

Tratándose de asuntos de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la ley prescribe que pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer esta jurisdicción, a través de los medios de control de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales<sup>1</sup>.

El inciso final del artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que adicionó el artículo 65 A de la Ley 23 de 1991, respecto a la aprobación de un acuerdo conciliatorio establece lo siguiente:

*“La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”.*

De acuerdo con este contexto, el Despacho examinará los siguientes presupuestos para la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio:

---

<sup>1</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá; MP. Clara Elisa Cifuentes Ortiz; 17 de mayo de 2017.

**1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1998)**

El numeral 1.º del literal d) del artículo 164 de la ley 1437 de 2011 dispone:

*“La demanda deberá ser presentada:*

1. *En cualquier tiempo, cuando:*  
(...)  
*d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo...”*

En el caso concreto, se tiene la petición radicada el 11 de septiembre de 2019<sup>2</sup> ante la Secretaría de Educación de Boyacá, por medio de la cual la parte convocante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, sin que la misma hubiera sido contestada por la entidad convocada; en consecuencia, operó el silencio administrativo negativo y el medio de control no está sujeto a ningún término de caducidad.

**2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes**

La Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, establece en su artículo 1.º que la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías deberá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, expedir el acto administrativo correspondiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos. En el artículo 2.º señala que, una vez en firme el acto de reconocimiento de las cesantías, el empleador tendrá un término máximo de 45 días para cancelar la prestación social, y en caso de mora, deberá pagar un día de salario por cada día de retardo, hasta que se haga efectivo el pago.

Por tanto, la sanción moratoria sobre la cual recae el acuerdo bajo estudio es una penalidad derivada del incumplimiento de la obligación de pagar oportunamente las cesantías al servidor público, en consecuencia, es un derecho particular de contenido económico, por lo que a voces de lo dispuesto en artículo 56 del Decreto 1818 de 1998<sup>3</sup>, es un asunto susceptible de conciliación.

**3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar**

El señor Hugo Alberto Amézquita Cárdenas se encuentra representado judicialmente por la abogada Jessica Julieth Rojas Jiménez, quien, según poder de sustitución obrante en el archivo denominado “12. Sustitución poder”, cuenta con facultad

<sup>2</sup> Hoja 19 del archivo “5. Solicitud de conciliación”

<sup>3</sup> “**ARTICULO 56. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN.** <Ver Notas del Editor> Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.”

expresa para conciliar y reconocimiento de personería para actuar, en auto de 3 de agosto de 2020.

A su vez, la entidad convocada se encuentra debidamente representada, a través de la abogada Nidia Stella Bermúdez Carrillo, según poder de sustitución otorgado por el abogado Luis Alfredo Sanabria Ríos, apoderado general tanto de la Nación-Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales como de la Fiduciaria La Previsora<sup>4</sup>. A la apoderada sustituta se le otorgó facultad para conciliar, de conformidad con el acta del Comité de Conciliación y le fue reconocida personería para actuar en la diligencia de 3 de agosto del presente del año.

En este orden, las partes se encontraban debidamente representadas y facultadas para participar en la audiencia de conciliación celebrada el 20 de abril de 2020.

**4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998)**

En la solicitud de conciliación obran los siguientes medios de prueba:

- ✓ Escrito radicado el 11 de septiembre de 2019 ante la Secretaría de Educación de Boyacá, mediante el cual el señor Hugo Alberto Amézquita Cárdenas solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria.
- ✓ Resolución N.º 000403 de 25 de enero de 2017, por medio de la cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ordenó el pago de una cesantía parcial a favor del docente Hugo Alberto Amézquita Cárdenas.

Adicionalmente, de este acto administrativo puede extraerse que el reconocimiento y pago de la cesantía fue solicitado a través de escrito radicado el 15 de noviembre de 2016.

- ✓ Escrito de la Fiduprevisora, en el que certifica que los dineros por concepto de cesantía parcial fueron puestos a disposición del convocante el 24 de abril de 2017.
- ✓ Certificado de salarios y devengados en el que consta que el docente Hugo Alberto Amézquita Cárdenas para el año 2017 devengaba una asignación básica equivalente a \$3.641.927.

Con sustento en lo anterior, el Juzgado encuentra acreditados los hechos narrados en la solicitud de conciliación, en tanto permiten establecer el período para desplegar el trámite administrativo para reconocer y disponer el pago efectivo del auxilio de cesantía, en los siguientes términos:

---

<sup>4</sup> Archivo "3. Sustitución poder MEN"

Fecha de la solicitud de reconocimiento de cesantía parcial	15 de noviembre de 2016
Fecha de vencimiento 15 días para el reconocimiento	06 de diciembre de 2016
Fecha de vencimiento 10 días del término de ejecutoria	21 de diciembre de 2016
Fecha de vencimiento día 45 hábil	23 de febrero de 2017

Ahora bien, la actuación administrativa se surtió en las siguientes etapas:

Fecha de reconocimiento la cesantía	25 de enero de 2017
Fecha en que se puso el dinero a disposición de la demandante	24 de abril de 2017
Fecha de pago	-0-
Período de mora	24 de febrero de 2017 al 23 de abril de 2017 (igual a 59 días)
Fecha de solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria	11 de septiembre de 2019
Fecha de vencimiento 3 años para efectuar la reclamación	24 de febrero de 2020

En este entendido, la Administración tenía hasta el 23 de febrero de 2017 para agotar el trámite administrativo relacionado con el reconocimiento y pago de la cesantía; sin embargo, su reconocimiento se produjo el 25 de enero de 2017 y el dinero fue puesto a disposición del convocante desde el 24 de abril de 2017, superándose de esa manera los términos consagrados en los artículos 4.º y 5.º de la Ley 1071 de 2006.

En consecuencia, la mora en el pago se prolongó entre el 24 de febrero y el 23 de abril de 2017, correspondiente al día siguiente al vencimiento del día 70 hábil ya mencionado y el día anterior en que los dineros fueron puestos a disposición del demandante por concepto de cesantía, para un total de 59 días de mora.

**5. De la no afectación al patrimonio público**

Con relación a este aspecto, el Consejo de Estado ha expresado que *“En tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley establece exigencias especiales que deben tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación. Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del art. 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado-en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes-, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la Ley (...)”*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup>Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente No. 85001233100020030009101, veintinueve (29) de enero del dos mil cuatro (2004).

Así las cosas, debe recordarse que si bien la Ley 244 de 1995 no dispuso textualmente que la sanción moratoria sea aplicable a los docentes, lo cierto es que el legislador no limitó la aplicación de la Ley 1071 de 2006 respecto a cierto tipo de servidores, ni de la redacción de la norma puede inferirse que se excluyan regímenes especiales, como es el caso de los docentes.

Sobre el particular, mediante Sentencias C- 741 de 2012 y C-486 de 2016, la Corte Constitucional expuso que si bien los docentes no formaban parte de los servidores públicos, su situación era asimilable, en primer lugar, porque el Estatuto Docente los definió como empleados públicos y la Ley 115 de 1994 como servidores públicos del régimen especial, y además, los docentes oficiales forman parte de la Rama Ejecutiva y sus funciones se desempeñan dentro de las secretarías de educación territoriales.

Posteriormente, en Sentencia SU-336 de 2017, dicha Corporación sostuvo que la sanción moratoria debía reconocerse a los docentes, porque acoger una postura diferente era ir en contra de la voluntad del legislativo, y una transgresión de los fundamentos constitucionales en los que se basó el proyecto de ley que regula la materia. Esta posición concuerda con la Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018 proferida por el Consejo de Estado<sup>6</sup>, en la que concluyó que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, y dispuso unificar la jurisprudencia en el sentido de que a los docentes resultan aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

En cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria, el Consejo de Estado en la sentencia de unificación antes reseñada, indicó que el conteo del término que tiene la Administración para disponer el reconocimiento de las cesantías definitivas o parciales, debe contabilizarse a partir de la petición elevada por el interesado, o su complementación, según el caso, luego de lo cual la entidad cuenta con 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías; plazo al cual deberá sumarse 10 días del término de ejecutoria del acto, y 45 días para hacer efectivo el pago, es decir, que transcurridos 70 días de presentada la solicitud comenzará a generarse la sanción moratoria.

De acuerdo con lo expuesto, al encontrarse verificada la mora en que incurrió la entidad convocada con relación al pago del auxilio de cesantía, de lo cual surge la sanción prevista en la Ley 1071 de 2006, puede inferirse una alta probabilidad de condena de la entidad convocada y que un proceso judicial implicaría gastos mayores con cargo al patrimonio de la entidad demandada, con el consecuente desgaste del aparato jurisdiccional.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

---

<sup>6</sup> CE. SCA – SII. Expediente 2014-00580-01 (4961-2015)

## RESUELVE

**PRIMERO.- Aprobar** el acuerdo conciliatorio contenido en el acta de conciliación de 3 de agosto 2020, celebrado entre el señor Hugo Alberto Amézquita Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 6.766.969, y la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ante la Procuraduría 177 Judicial I para Asuntos Administrativos de Tunja, consistente en el pago de la suma de seis millones trece mil setecientos quince pesos (\$6.013.715), correspondiente al 90% de la sanción moratoria derivada del reconocimiento de la cesantía parcial efectuado mediante la Resolución N.º 000403 de 25 de enero de 2017, dentro del mes siguiente a la presente aprobación judicial.

**SEGUNDO.-** En firme la presente providencia, expídanse copias auténticas de la misma y del acta de conciliación respectiva con destino a las partes, de conformidad al artículo 114 del CGP, y en los términos del Acuerdo PSAA16-10458 de 12 de febrero de 2016.

**TERCERO.-** Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente con las constancias y anotaciones de rigor.

**Notifíquese<sup>7</sup> y cúmplase**

**Firmado Por:**

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

7

<p><b>Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja</b></p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>La anterior providencia se notifica por estado electrónico N.º 27 de hoy 11 de septiembre de 2020, a las 8:00 a. m.</p> <p><b>FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ</b> Secretario</p>
---

Código de verificación:  
**794a64ff9b7c3547c100d29ac426f6bc39a96e637dc56f5c7fcefa38867da2e6**  
Documento generado en 10/09/2020 10:41:34 a.m.